

El M-19 en el contexto de las guerrillas en Colombia

Mario Luna Benítez*

Resumen

Este artículo aborda, con sentido crítico, algunos argumentos de la sociología política en Colombia sobre las guerrillas en el país, en especial del período de su emergencia. Reformula los rasgos característicos de los grupos armados y los compara con los del M-19. Pone así en perspectiva el estudio sobre este último y desarrolla como alternativa de enfoque su relación con varios contextos de violencia, reconociendo continuidades y rupturas con la violencia de los años 50.

Abstract

This paper examines, with a critical approach, some arguments of political sociology in Colombia regarding the guerrillas, especially during the outset period. It restates the analytical features of armed groups and puts them in comparative relation to M-19. In this way the study of this group is placed in perspective and, as an alternative approach, it develops the relationship with different contexts of violence, marking continuities and discontinuities with the violence of 1950's.

Palabras clave: Sociología de la guerrilla, guerrilla(s), grupos armados, ideología, interacción, contexto de violencia, centro-periferia, M-19.

* Sociólogo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle. El autor pertenece al grupo de investigación *Acción colectiva y conflicto*, y el estudio del M-19 se realiza en este marco.

Introducción

En el período 1974-1989, el M-19 introdujo una novedad en las formas de la resistencia política y sorprendió por las acciones armadas que realizaba. Su formación, cuando ya existía un conjunto de guerrillas, fue posible por una experiencia acumulada en la lucha armada. Ésta fue punto de apoyo para que sus fundadores buscaran la transformación del horizonte político del conflicto armado. Así el M-19 aportó elementos nuevos a la acción guerrillera en Colombia.

Son pocos los estudios monográficos de guerrillas orientados por una preocupación académica y sociológica. Entre los publicados, podemos contabilizar al menos dos sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el primero de Eduardo Pizarro (1991a) y uno reciente de Juan G. Ferro y Graciela Uribe (2002), y cuatro sobre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, siendo el primero el de Alejo Vargas (1992), luego dos de Carlos Medina (1994, 2001), y el de Roberto Sancho (2003), un estudio académico comparativo con la *ETA* española. Sobre el Ejército Popular de Liberación, EPL, apenas existen algunos libros testimoniales de sus ex militantes (Calvo 1987 y Villarraga y Plazas 1994). Sobre el Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, aún esperamos la publicación de la monografía de Ricardo Peñaranda aunque contamos con dos buenos artículos que citaremos más adelante.

En este texto, en primer lugar, buscaremos una delimitación de nuestra perspectiva de análisis dentro del campo de la reflexión sociológica sobre las guerrillas, con el fin de abrir perspectivas metodológicas y de enfoque para el estudio del M-19. De paso esperamos reabrir la agenda para nuevas reflexiones sobre los otros grupos, sin que la cubramos aquí. En segundo lugar, este artículo expondrá los primeros rasgos políticos descifrados sobre el M-19, luego de un período inicial de investigación.

En el campo de la sociología política colombiana el trabajo de Eduardo Pizarro sobre la guerrilla ha sido el más relevante. Pizarro inició desde 1990 (Pizarro 1990 y Pizarro 1991b) un esfuerzo de comprensión, intelectual y académico, buscando una definición de los grupos armados orientada a establecer su disponibilidad para una negociación que pusiera fin al conflicto armado. En sus primeros artículos acuñó la idea de una “sociología de la guerrilla” que se apoyaba en un enfoque de tipología. La inscribió luego en una visión más amplia, apoyándose en algunos teóricos del campo de la acción colectiva.

Un esfuerzo de comprensión más general, aunque no abarcador de las guerrillas, lo emprendió al mismo tiempo el Cinep. Fue un trabajo ambicioso en el cual se intentaba relacionar diversos tipos de violencia con la formación de sociedades regionales y locales, en un enfoque que deseaba combinar tiempos de larga duración con asentamientos espaciales de una tradición de violencia

política y de otras violencias, como las sociales y las delincuenciales. Esta combinación de tiempo y espacio fue su mayor virtud, al elaborar un conjunto de monografías en casos donde el componente de la colonización había sido muy fuerte. Entre ellas estaba el texto mencionado de Alejo Vargas y el muy interesante estudio de José Jairo González sobre las llamadas Repúblicas Independientes (1992), que abre una luz esclarecedora no sólo sobre el conflicto armado campesino que se constituyó en antecedente fundamental de la formación de las FARC, sino también sobre la lógica de exclusión mutua de las autodefensas campesinas. También hicieron parte de ese conjunto de trabajos, ensayos más generales sobre la modernización y la construcción del país, sobre el narcotráfico o los procesos de Paz.¹

Nuestra referencia básica será el trabajo de Pizarro por su mayor pertinencia sobre el tema de la guerrilla. Criticaremos ciertos aspectos de su enfoque general y luego nos centraremos en su “sociología de la guerrilla”. Este esquema contiene los descriptores básicos de una monografía sobre una guerrilla, aunque por sí solos no resuelven el problema de una interpretación general. Apuntaremos a discutir su distribución de los grupos armados dentro de su tipología sociológica, sin criticar la preocupación que guía esa distribución, orientada a descifrar la capacidad de negociación o de radicalización de las guerrillas colombianas. Con esta remisión crítica haremos también un recorrido por los distintos aspectos de éstas. No es arbitrario este camino de presentación de esas guerrillas, pues la crítica muestra su complejidad histórica, que dificulta cualquier asignación tipológica en cualquier fase del conflicto armado. En el trabajo de crítica nos apoyaremos la mayoría de las veces en fuentes secundarias, sin excluir las primarias.

Radicaremos la emergencia y el avance de las guerrillas en diversos contextos interactivos de violencia que, al reseñarlos, rompen con la idea de una continuidad simple de *La Violencia*, que es un punto relativamente olvidado por Pizarro al concentrarse en las idealizaciones armadas a nivel latinoamericano luego de la revolución cubana. Criticamos la idea que supone que los grupos armados serían continuadores de esa violencia sin ninguna mediación de los contextos históricos, políticos y sociales. Esbozaremos esta alternativa que propone retos mayores al investigador que quiere ir más allá del enfoque de Pizarro, que concluye en unas distribuciones de las guerrillas según atributos ideológicos. Finalmente el artículo esbozará rasgos centrales del M-19, anotando las diferencias del grupo respecto a las otras guerrillas colombianas.

¹ Nos referimos a la colección *Sociedad y Conflicto* orientada por el Cinep (1992-1998).

Los aspectos generales del enfoque de la sociología de la guerrilla

En su libro *Insurgencia sin revolución*, 1996, Pizarro enmarca su sociología de la guerrilla en una visión general del problema de la revolución, concentrándose en las posibilidades de éxito de la insurgencia colombiana, siguiendo una lógica deductiva desde dimensiones latinoamericanas. Estaba guiado por una preocupación sobre si la insurgencia conducía a la revolución o no, y concluía caracterizándola con la noción de “insurgencia crónica”.

Esa noción plantea un destino de supervivencia de la guerrilla sin posibilidad de éxito. Es una imagen del conflicto armado que no hace honor a la idea de Charles Tilly (1978) recogida por Pizarro (1996, p. 5)² sobre cómo intervienen, en fuerte medida, el azar y la incertidumbre producidos en el juego de las múltiples interacciones entre los actores sociales en la dinámica y en los resultados de un proceso revolucionario. Esta idea implicaría que siempre puede haber un juego abierto a la acción exitosa, mientras la idea de “insurgencia crónica” lo cierra declarando el fracaso. Además, esta última noción produce una imagen lineal, como si el conflicto no sufriera variaciones que a su vez crean mayores incertidumbres que imposibilitan el cálculo sobre el éxito o el fracaso. De no advertir estos cambios y los creados en la escala del conflicto y en los contextos de acción, compartiríamos esa noción, pues nuestro estudio revela al M-19 como reproductor de la violencia. A pesar de ello su proceso es un ejemplo de la variante del juego abierto, pues llevó el conflicto a otra escala y modificó el panorama de la guerrilla, cuando todo indicaba que los grupos sucumbirían o se estancarían en las fronteras de la sociedad, como las FARC.

La reflexión de Pizarro enmarca en dos sentidos el tema de la guerrilla en una dimensión latinoamericana. Propone primero el estudio de las posibilidades de éxito o fracaso de las guerrillas realizando comparaciones de sus condiciones económicas y políticas, entre los países. Es un esfuerzo que Wickham-Crowley realizó unos años antes (Wickham-Crowley 1992). El norte está trazado por el éxito de la revolución en Cuba y Nicaragua y por su fracaso en Guatemala y El Salvador, donde los procesos de insurgencia terminaron en negociaciones. En segundo lugar, Pizarro hace de esa dimensión una dimensión geopolítica sustantiva, sostenida por la idea de la formación de un contexto sociocultural e ideológico común que explicaría la emergencia de los grupos de guerrilla en los países de la región. Reconociendo la importancia del primer sentido, no nos detenemos a comentar su factibilidad, pues no es nuestro interés ubicar al M-19 ni en sus rasgos revolucionarios, ni en sus posibilidades de éxito o de negociación. En cambio es más importante comentar el segundo, ya que es el

² Además, el autor cita, sin profundizar y sin sacar todas las consecuencias, a Michel Dobry, un teórico por excelencia de la fluidez política de los conflictos y de los acontecimientos políticos (Dobry 1988).

atinente para intentar comprender la emergencia del M-19, sus rasgos y sus formas de acción en el conjunto de las guerrillas colombianas.

Esa dimensión sociocultural latinoamericana es apoyada en tres elementos. El primero, la difusión del marxismo con su idea de la existencia de unas “condiciones estructurales” favorables a la revolución. El segundo, una influencia generalizada de la idea del Che Guevara de no esperar a la formación de “todas las condiciones para la revolución” refiriéndose a la espera de condiciones subjetivas de aceptación en la población de un proyecto revolucionario pues el “foco insurreccional podía crearlas”, una idea en la que más tarde Debray colocará el énfasis como teórico del foquismo. Por último, un dominio en las ciencias sociales en Latinoamérica de las llamadas teorías de la dependencia.

Nada nos dice Pizarro de los tiempos de llegada y de confluencia de esos elementos hasta formar esa ideología revolucionaria que, según él, conduce al voluntarismo impulsor de las guerrillas. Ni siquiera un indicativo de las fechas de publicación, de traducción y de circulación de los libros que les sirven de soporte, aunque sabemos que esa no es la única vía de difusión y de apropiación de las ideas. En principio pensamos que esas temporalidades fueron distintas para cada país. Para Colombia esas publicaciones llegaron *post festum*, después de formadas las guerrillas, a fines de los años 60, como el texto de Debray sobre la *Revolución en la revolución* (Debray 1968).³ La presentación de la experiencia del Che Guevara en la *Guerra de guerrillas* (ibíd. 1978)⁴ también fue un poco tardía. Las teorías latinoamericanas de la dependencia llegaron a Colombia cuando, en los albores de los años 70,⁵ la acción de los movimientos sociales urbanos disminuía el ímpetu de atracción por vincularse a las guerrillas, al declinar esa primera representación del escenario rural como eje del conflicto social o de las armas. Es necesario pensar además en el nivel de inserción social de esas tradiciones socioculturales e ideológicas de los partidos y grupos políticos, marxistas o no. El asunto lleva a concluir que pueden ser otros los mecanismos a través de los cuales avanza la apropiación de la experiencia cubana.

Nuestra crítica va más allá. Dada la naturaleza de los tres elementos, el llamado contexto sociocultural latinoamericano queda reducido a *una subjetividad de carácter ideológico general*, que compite fuertemente en el texto de Pizarro con su llamado a considerar las condiciones nacionales. De esa manera aquel contexto y estas condiciones experimentadas para la emergencia de la insurgencia armada, a la hora del análisis, son reducidos a los efectos de una ideología general: el

³ Fecha de la primera edición en nuestro país.

⁴ La primera edición en Cuba fue en el año de 1963, desconocemos la fecha de llegada en Colombia.

⁵ Si hubo una relación de las guerrillas en Colombia con ideas de la dependencia fue un producto nuestro, pues el libro de Mario Arrubla *Estudios Sobre el subdesarrollo colombiano* (julio de 1969) el primero de la editorial Oveja Negra y dedicado 'A la memoria de Ernesto Guevara' recogía ensayos producidos a fines de los años 50 y publicados en la revista *Estrategia*, en 1962, por ejemplo un “Esquema histórico de las Formas de Dependencia”.

castrismo o el foquismo. A reforzar este argumento llega una idea conclusiva de su exploración teórica: que un “foco armado” puede nacer en cualquier contexto de condiciones nacionales, dependiendo sólo de las decisiones y voluntades de sus gestores.

Desde esta perspectiva analiza el primer ciclo de las guerrillas, olvidando que decisiones y voluntades, estando incrustadas en dinámicas de relaciones políticas, tienen particularidades sociales, culturales y políticas. Así dependen de las particularidades de contextos nacionales, regionales y locales, que son el centro de atención de cualquier sociología o antropología. Entonces no hay creación en abstracto de un foco a lo cual pudiera agregarse el complemento de una posesión de recursos, como nos dice Pizarro, ya que estos recursos no siendo exclusivamente materiales dependen de la dinámica de esos contextos.

Las diferencias socioculturales de las guerrillas se le escapan a Pizarro por su prejuicio, no sabemos si valorativo, de que los grupos guerrilleros en Colombia, con excepción de las FARC, surgen de un voluntarismo de oleadas de activistas animados por la revolución cubana y por su elección del “método” del foquismo, a lo cual queda reducido este último luego de haberlo pensado como un complejo de representaciones ideológicas del proceso revolucionario. Por lo demás, esta reducción le resta capacidad explicativa a su idea de la influencia del foquismo.

Un segundo aspecto de esa unificación artificiosa de Latinoamérica es la división de las guerrillas en dos fases, una primera serie definida por los impactos de la revolución en Cuba (1959) y una segunda, por los impactos de la revolución en Nicaragua (1979), llamada *guerrillas de segunda generación*. Se trata de un criterio descriptivo que subdivide a las guerrillas por medio de un factor que resalta un impacto exterior por encima de la importancia del examen de los procesos nacionales de resistencia política.⁶ Su significado se pierde al simplificar los rasgos de las guerrillas en contextos nacionales donde hay una amplia tradición del conflicto armado, como es el caso en Colombia, independizándolas de la complejidad de la violencia política. Nos preguntamos si la descripción implica deducir que los grupos avanzarían de niveles de simplicidad a una complejidad política y social mayor. Si bien se pueden anotar cambios en las consideraciones estratégicas de los grupos armados, otros aspectos centrales que definen su complejidad, tal como ciertos elementos de sus repertorios de acción (por ejemplo el secuestro y el uso de la relación con la delincuencia) o formas del dominio territorial o poblacional, están desde un comienzo en algunos de los grupos, así no se hayan desarrollado en la extensión e intensidad de los años 80.

Pizarro designa al M-19 como un grupo de segunda generación. Olvida el análisis de sus fases previas a los años 80, lo que conduciría a reconocer su complejidad como actor político y a destacar su papel como síntesis de formas de la oposición civil y de la violencia política de izquierda en el plano nacional. Esta

⁶ Roberto Sancho trata de equilibrar esta tendencia explicativa al proponer para la emergencia del ELN la existencia de factores externos e internos, que supone la condicionan.

síntesis convierte al M-19 en el motor de una reproducción ampliada de esa violencia. Consideramos por ello que el impacto de esas revoluciones debe ser precisado en contextos específicos sociales, históricos y antropológicos. Además concluimos que esa división descriptiva no puede ser el criterio central de clasificación de las guerrillas.

Pero avancemos a otros aspectos de la crítica. El apoyarse en la idea de una ideología latinoamericana es un resultado sesgado de una reflexión central de Pizarro. Siguiendo a Waldman sobre la emergencia de “los focos”, retoma la idea de que dicha emergencia no tiene reglas fijas y por ello la necesidad de reivindicar los aspectos subjetivos relacionados con acciones, decisiones y voluntades (Waldman 1986). Igualmente retoma a Wiewiorka para reafirmar, respecto a ciertas versiones particulares, que esa emergencia de las guerrillas puede darse frente a Estados fuertes o precarios (Wiewiorka 1988). Ambos tienden a acentuar su crítica de los enfoques explicativos de la emergencia por condiciones estructurales de diverso orden, argumentando que ellas pueden producir fenómenos diferentes a la rebelión. Siguiendo la pauta, Pizarro los rechaza también por determinar conductas reactivas a una “situación estructural” y dejar de lado el reconocimiento de las conductas políticas que conducen a la formación de la guerrilla. Insiste con Wiewiorka en la necesidad de tener en cuenta la elaboración de las estrategias de acción y la construcción de los idearios políticos (Pizarro 1996, p. 26).

Establecida la crítica a la explicación causal estructural, crítica que compartimos, se cierne un vacío en la argumentación de Pizarro que lo lleva con ambigüedad a regresar a esa explicación. Para él las condiciones subjetivas, reducidas a ideología, intervienen más en la emergencia mientras que en la fase de la consolidación y la expansión de las guerrillas se necesita de condiciones sociopolíticas, en una nueva versión de las condiciones estructurales. Teme Pizarro que de no considerar esas “situaciones del sistema”, se abra el abismo de la subjetividad trazado por el cálculo racional de los actores, un temor obvio según la forma como considera la subjetividad. También daría paso, dice, a la idea de una conspiración de poderes exteriores.⁷

No considera Pizarro que la subjetividad pueda tener parámetros sociales, políticos, culturales, históricos y antropológicos que no son del orden del cálculo racional y que son justamente los que debe examinar el investigador, además de considerar de otra manera a esos contextos.⁸ Es esa una parálisis y una inconsecuencia que le permite subjetivar, por decirlo así, el momento de la emergencia y objetivar las fases posteriores de la guerrilla. Por ello decide que en las llamadas “condiciones del sistema” se define el impacto y la importancia “del

⁷ Con esa tesis explica Castañeda (1994) el origen de las guerrillas, un libro no citado por Pizarro.

⁸ Nuestra noción de contexto social es deudora de la de contexto interactivo. Las llamadas condiciones hacen parte de la interacción y se forman en ella. Ello no implica olvidar el papel del tiempo y la duración y menos las dimensiones espaciales, pero considerando cómo ingresan en el análisis del contexto.

esfuerzo voluntarista de los actores armados”, de la elaboración de sus estrategias y sus idearios.

En síntesis Pizarro no fija la atención en los rasgos sociales y políticos de las iniciativas, reduce los aspectos subjetivos al aspecto parcial de su configuración ideológica asignándole un papel central. Así uniforma y nivela las condiciones nacionales al subrayar la influencia de la revolución cubana como “ambiente favorable” (el castrismo), a través del papel desempeñado por las clases medias como portadoras de esos impactos. Igualmente este énfasis en las clases medias peca por su generalidad. No todas las clases medias son iguales en su formación, ni todas ellas participan en la emergencia de la guerrilla, justamente porque el juego de las interacciones sociales con el Estado y la economía diferencian la dinámica y el desempeño de esos sectores de clase. Además, el papel de un sector de clase media u otro, o el significado de la apropiación de una experiencia exterior depende de situaciones históricas particulares.

Si ilustráramos con una digresión, indicaríamos cómo los agentes revolucionarios en Guatemala y Venezuela donde militares y comunistas jugaron un papel central en procesos anteriores de conspiración y golpes de Estado siguieron aspirando a un cambio súbito, apropiándose del llamado “método cubano” de guerrilla para integrarlo a prácticas de *putsch* o de revuelta urbana, procedimientos que fueron normales en la resistencia y el cambio político en esos países (Debray 1975). Es por ello que unos años más tarde, para relevar la importancia del foco, Debray combate teóricamente a esas prácticas para limpiar el camino a otra estrategia.

Fue más importante en Colombia una previa recepción imaginaria del orden de los eventos que había conducido al éxito en Cuba. Se procedió por una imitación simple, cuyo soporte central era la recepción urbana de los acontecimientos en el campo colombiano: se suponía la existencia generalizada de unas disposiciones campesinas para la violencia, cuya muestra era el funcionamiento de las bandas armadas que subsistían desde *la Violencia* de los años 50. El experimento de Antonio Larrota es uno de los ejemplos, cuando aún no había la difusión de los textos de la experiencia cubana. Sobre esta experiencia y su discusión en el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, MOEC, del cual Larrota era el secretario de organización, Raúl Alameda nos comenta ironizando esa recepción imaginaria, en una entrevista que en su amplitud mostraría las condiciones propias de creación de oposición en el país:

El MOEC se opuso al partido, [...] el partido en su línea política no incluía una organización de tipo guerrillera [...] Larrota y otros intentaron repetir la episódica cubana, no la ideología, no la estrategia sino la episódica, había que tomarse un cuartel, había que hacer un asalto a la presidencia de la república, había que irse aunque sea a San Andrés y Providencia y venirse en un barco [...] y entonces meterse a la Sierra Nevada, vainas esas, muy buena gente pero muy infantil en ese aspecto [...] él tenía una concepción muy simplista que no era sino meterse uno al monte, llevar una grabadora y lanzar una proclama, tomarse una radio como habían hecho en Cuba y lanzar un manifiesto [...] que el pueblo se iba a levantar, [...] que... vendría por añadidura la reacción popular y todo eso iba a ser automático (Alameda 2005).

De otra parte, el entrenamiento militar en Cuba de brigadas de activistas en 1963 fue la vía para concretar la formación de un recurso material y humano para esa implantación ya deseada desde líneas de oposición y resistencia formadas en el plano nacional.

Para ejemplificar cómo actúan formas propiamente nacionales de la voluntad revolucionaria y de la resistencia civil, miremos el periplo del M-19. Éste comenzó con una expectativa en las llamadas tácticas de levantamientos urbanos el bogotazo del 48, las manifestaciones anapistas del 70 dentro de las cuales suponía que la guerrilla urbana jugaría un papel grande. Sin embargo el M-19 terminó asentándose en el campo, primero con una estrategia que combinaba diversos escenarios, rurales y urbanos, entre 1978 y 1984, después con una reducción de sus expectativas, que se centraron en la creación de un ejército bolivariano en el campo. Este cambio no es atribuible a una regresión a la desviación ideológica foquista, sino a una confianza mayor en que las condiciones de oposición y resistencia política eran más favorables en el medio rural. Era un regreso a una idea nacida en la formación histórica de la subjetividad cultural y política de la oposición de izquierda en Colombia.

Se podría concluir en este punto, si se trata de métodos y no de ideologías totalizadoras, que las formas de proceder están ahí, arrojadas por procesos históricos que tienen repercusiones internacionales y para ser apropiadas en cualquier momento. Además, las condiciones socioculturales y antropológicas implícitas en las voluntades revolucionarias y que respaldan las decisiones para crear un grupo armado son diferentes en cada país y su estudio es el relevante para descifrar cualquier fase de la guerrilla. Ahora bien, esas condiciones no son descifrables por fuera del examen de contextos dinámicos de relaciones sociales nacionales, esto es, de conflictos sociales entre actores, incluyendo los institucionales.

Aquí arribamos al punto donde Pizarro se detiene y no hila las consideraciones teóricas que él mismo ha puesto sobre el tapete. Es claro que no es fácil salir del laberinto del enfoque estructuralista y ello propone retos mayores como el de darle sentido a elementos de las teorías de la acción colectiva, a las consideraciones interactivas entre los actores y entre éstos y las llamadas “condiciones de la acción”, o mejor, el reto de considerar las fases de la formación y desarrollo de la guerrilla como procesos complejos de interacción e interdependencia, en los cuales el azar histórico juega un papel muy importante.

En realidad debe profundizarse la crítica a la explicación por los llamados “factores estructurales”: éstos no son un dato previo a las situaciones dinámicas de emergencia y consolidación de los fenómenos sociales. Por ejemplo, las instituciones del Frente Nacional que responden a políticas de represión o de control e integración social, urbana y rural, no son un dato previo al conflicto social y, en especial, al guerrillero, aunque tenían antecedentes en la contención de los conflictos de la violencia de los años 50. Debe pensárselas en un proceso de reformulación dentro de un cuadro complejo de interacción de diversos actores. Lo que fue un acuerdo entre partidos llegó a ser la formación de un régimen

político, con sus dinámicas y sus esclerosis.

En ese sentido nuestro esfuerzo se dirige a pensar que no existen condiciones generales previas que expliquen de manera simple a otros fenómenos sociales que serían su efecto. En cada país, cada contexto social tiene sus definiciones específicas y la importancia y el peso, mayor o menor, de una “condición” se destaca en la formación misma de ese contexto. En ésta inciden principalmente los conflictos sociales y a su vez interactúa la dinámica de los propios fenómenos analizados. Siguiendo a Daniel Pécaut (1987, 1997) y en ruptura con las explicaciones causales corrientes en Colombia, nuestra alternativa es la de introducir la noción de contextos histórico-sociales de violencia, entendidos como contextos interactivos,⁹ de interdependencia¹⁰ y de intercambio entre actores. Con este enfoque se resuelve ese dilema no resuelto por Pizarro.

En síntesis, aceptamos aspectos de la aproximación analítica de Pizarro pero criticamos algunos de sus presupuestos generales y sus inconsecuencias. Donde reedita factores generales nosotros percibimos vacíos de análisis empíricos. Donde anota el juego de las ideologías, señalamos la importancia de los procesos antropológicos, sociológicos y culturales, y al mismo tiempo hacemos énfasis en darle lugar a nociones que colocan el acento en procesos de interacción social e histórica, como los contextos de violencia del país, alejándonos justamente de referencias latinoamericanistas unificadoras de los sentidos de las resistencias nacionales. Ello no quiere decir que, a propósito de cualquier grupo, no encontremos formas de apropiación singular de la experiencia guerrillera universal o latinoamericana, pero ello no puede ser el eje central de su análisis.

Una discusión sobre la distribución de las guerrillas en la tipología de Pizarro

El cuadro de tipología sociológica de las guerrillas apunta a resolver su complejidad en Colombia. Pizarro lo desarrolla primero en un artículo y lo integra luego a su libro. Ese cuadro no está construido desde referencias empíricas y sí desde adaptaciones deductivas a las orientaciones de su enfoque. Su logro es de un alcance ideal, acertado mientras se simplifiquen los rasgos históricos de los grupos armados y mientras se tenga una imagen poco compleja de su primera época.

Encontramos que el “esfuerzo voluntarista” de los actores armados, sus estrategias de acción y sus idearios políticos, son reunidos bajo la idea de

⁹ En estos contextos donde concurren una pluralidad de actores el comportamiento de los unos se regula y se orienta por el comportamiento de los otros de manera recíproca. En ellos no necesariamente la interacción se cristaliza en roles sociales y pueden tener éstos mucha fluidez (Chazel 1986, p. 253).

¹⁰ La interdependencia se caracteriza por el hecho de que cada actor afecta el conjunto de todos los otros actores, incluso en circunstancias en que hay ausencia de interacción entre ellos (Chazel 1986, p. 253).

proyecto revolucionario, una idea central en el desempeño de la tipología según su énfasis en los aspectos subjetivos. Como la complejidad no es resuelta por el papel determinante de las configuraciones ideológicas, se adjuntan otros criterios para dar cuenta de la variedad de las guerrillas, de sus orígenes diversos, de sus fraccionamientos y de la importancia de algunas de ellas por sus rasgos distintivos. Todos esos criterios son reunidos en 5 ejes que en su combinación ideal dan lugar a tres tipos, que se hacen corresponder con las más importantes, en una asignación que discutimos aquí.

El primer eje lo define '*el origen histórico del grupo*'; el segundo está configurado por *el carácter del proyecto revolucionario* del grupo junto con '*la relación social y el papel de lo militar*'; el tercero destaca la '*definición del enemigo y objetivos finales*'; el cuarto se centra en las '*modalidades de legitimación frente a sus bases inmediatas*', y finalmente, el quinto se fija en la '*relación con el territorio: construcción de aparatos de poder y legalidad alternativa*'. Así, de esta descomposición y combinación de aspectos militares, políticos y sociales, se definen el tipo militar (el ELN), el tipo partisano (las FARC) y el llamado societal (el MAQL). Avancemos comentando esa correspondencia entre tipo y grupo.

En primer lugar, en esa tipología se define un rango de violencia cuyos extremos serían: de un lado el tipo que va a la deriva de la violencia y el militarismo (el ELN) y del otro, aquel cuya violencia proviene de una relación con lo social (el Quintín Lame); en el intermedio sobresale el tipo que gira alrededor de la violencia política (las FARC). Esta interpretación no coincide con una exploración a fondo de los grupos. En ellos se mezclan los rasgos de unos y otros, y con mayor razón en la medida en que se forma un contexto de violencia propiamente guerrillera. Las diferencias se anulan aún más desde fines de los años 70, cuando también avanzan los impactos del narcotráfico y de las riquezas fáciles sobre las guerrillas.

En segundo lugar, si bien esos 5 ejes son teóricamente relevantes y en destacarlos está el aporte de Pizarro, no parece correcta su combinación ideal aplicada a Colombia. Según Pizarro, el esquema resulta de una mirada analítica sobre aspectos empíricos y advierte que no tiene "la pretensión de plantear tipos ideales como categorías universales, sino tipos empíricos con un cierto nivel de abstracción" (Pizarro 1996, pp. 56-57). Pero justamente en este procedimiento reside su dificultad, pues procede por una simplificación de los rasgos de los grupos para acomodarlos en la tipología. Lo hace basado en una imagen de las guerrillas previa a los años 80, cuando ellas ostentaban ciertos rasgos diferentes, en especiallos relacionados con las representaciones y las ideologías desde donde se definían. Desde fines de los años 60 y comienzos de los 70, las discusiones sobre cómo representarse el país y la acción colectiva revolucionaria coparon el panorama de la definición de la izquierda. Contrariando esta seducción de la época, en otra perspectiva nosotros haríamos énfasis en ciertos aspectos de los entornos sociales, culturales y políticos donde se originaron las guerrillas, relaciones que se advierten detrás de su imagen pública e ideológica. Son

aspectos que definen rasgos sustantivos en cada grupo y que a la larga significarían su permanencia en el tiempo, mostrando artificiosa la asignación de un tipo de análisis para la emergencia y otro para la consolidación.

En tercer lugar, las dificultades se concretan cuando escoge como criterio sobre “el origen histórico” de las guerrillas a la noción de iniciativa política (voluntades, acciones y decisiones de sus gestores). Con esta noción pone en primer plano el papel de representaciones e ideologías, examinadas en los discursos de presentación de los grupos, expuestos en breves documentos como el *Manifiesto de Simacota* leído por el ELN ante periodistas internacionales en la toma del pueblo del mismo nombre, o como en la toma de Santander de Quilichao por el Comando Quintín Lame, en donde este grupo lanzó una octavilla exponiendo los motivos de defensa de las comunidades.

De este modo, para Pizarro la 'iniciativa política' es externa a la dinámica del conflicto social. En consecuencia supone que la iniciativa política es fuerte en el tipo que actúa por fuera del conflicto social (el militar) y de bajo perfil en el tipo societal, cuyos parámetros los definiría una mayor inserción en el conflicto social (en el caso del Quintín Lame, el conflicto étnico y un movimiento comunitario). Así este tipo resultaría de la expresión *directa* de un movimiento social, pues el grupo armado nacería dentro de él. Los indicios evidentes de esta última asignación son el nombre del grupo una recreación de la memoria de lucha apelando al nombre de un destacado dirigente indígena de los años 20 y 30 ; la composición indígena de su base militar; el radio de acción en el Cauca, zona de fuerte composición indígena, región que fue escenario importante del conflicto armado en los años 80.

Con estos tres aspectos comentados podemos avanzar en una crítica general de la tipología. Ella se funda sobre la posibilidad empírica e histórica de su tipo societal. Pizarro olvida que los movimientos sociales no han existido en Colombia sin mediaciones ideológicas y políticas de agentes especializados, incluyendo al movimiento de los indígenas, y en especial en el Cauca, donde se gestó el Quintín Lame. Así tenemos el testimonio de uno de los miembros del M-19 que participó en el impulso de sus iniciativas armadas en el Valle y en el Cauca y que reafirmará la presencia de las estrategias de otros grupos en la gestación del MAQL:

En la móvil del Cauca, que se hizo con lo que fue después el Quintín Lame, pero se hizo con gente de dirección del Cric, del Consejo Regional Indígena del Cauca [...] finales del 78 [¿Vos participaste de esa experiencia?] Sí, claro [...] [¿Es temprana esa vinculación del Cric al M-19?] jü [...] el M-19 prácticamente tomó la decisión [...] de apoyar ese proceso que se convirtió [...] en una referencia [...], en el 78 éramos una organización que tenía una muy buena imagen [...], nos convertimos en una especie de, de, de... de hada madrina {ríe} de procesos organizativos, políticos y militares.¹¹

¹¹ Testimonio de Peregoyo, dirigente de rango medio alto del M-19.

Esa reducción que atribuye el origen histórico de las guerrillas a unas expresiones ideológicas y a unas decisiones “voluntaristas”, está también al servicio de la búsqueda de Pizarro por asignar una legitimidad a los grupos. Por ello la iniciativa armada es legitimada cuando expresa el conflicto de un sector social particular. Así plenamente legítimo sería el MAQL y en menor medida las FARC por ser expresión de conflictos campesinos aunque ligadas a un agente externo, el partido comunista. La legitimidad se pierde en el tipo militar, excluido por Pizarro de “expresiones sociales”, más precisamente en su lenguaje, carente de *representación* de sectores sociales: el ELN sería un resultado de una ideología el foquismo y la expresión de un “voluntarismo puro”. Nuestra crítica avanza sobre su noción de iniciativa política y sobre la relación, establecida por el autor, entre grupos y representación de sectores sociales.

La noción de *iniciativa política* separada de los contextos sociales y políticos en los cuales se generan los grupos armados incluyendo el tipo militar termina siendo difusa y abstracta. Considerada por fuera de esos contextos es reducida al malestar intelectual de unos agentes (las “impaciencias” de la clase media), o bien es atribuida a un 'reflejo ideológico' de males estructurales, o sea, producto de condiciones externas a esos contextos. La *iniciativa política* es así alejada de las relaciones sociales en las que puede explicarse.

Como alternativa a este enfoque sería justo encontrar las mediaciones existentes (incluyendo las ideológicas y subjetivas) entre los contextos sociales y políticos y el proceso microsociedad de emergencia y consolidación de los grupos armados. Esto es, examinar los contextos inmediatos, locales y regionales, de la irrupción de las guerrillas en la vida pública, incluyendo justamente el caso del Quintín Lame. Los estudios sobre éste ponen en evidencia aspectos de su formación que dan relatividad a su definición como tipo societal. Para ese momento en Colombia, años 80, existían en los movimientos sociales tendencias que favorecían su hiper-politización hacia las armas, en medio de un progresivo debilitamiento de sus expresiones sociales. Si bien el Quintín respondió al drama de las comunidades indígenas frente a la acción de grupos armados, los perfiles de su formación son más complejos. Existió el interés en impulsarlo por el M-19 y el Ricardo Franco, interés que hace pensar que la adopción de las armas por los indígenas no se limitaba a fines estrictamente defensivos sino que seguía fines estratégicos mayores en el Cauca. Además, el Quintín recurre a las mismas representaciones sociales de tener en su haber un pasado de violencia, real o imaginado, para legitimar su alistamiento para la guerra.¹² El aspecto político y el societal se acompañan de otra forma, pero con similitud al inicio de las FARC.

Un dato indicativo de cómo el grupo indígena estaba comprometido en ese contexto de violencia guerrillera: para fines de los años 80, cuando se discutía el ingreso al proceso de paz, mientras el Estado Mayor del grupo, compuesto por indígenas, deseaba avanzar en una estrategia corriente de confrontación militar,

¹² Sobre las ambigüedades del Quintín Lame, el artículo de Peñaranda (1999).

la Dirección política en su mayoría “blanca” proponía la negociación y disolución del grupo. No era tan simple la definición del móvil de los indígenas gestores del MAQL, como una toma de las armas en defensa comunitaria y sí por el contrario una orientación hacia objetivos estratégicos de confrontación más general con el Estado.

También sería justo considerar que esa irrupción de los grupos armados y su acción impacta como un factor más en la producción de condiciones favorables a su desarrollo al modificar la acción de otros actores sociales y políticos. Yendo más allá, se puede subrayar que bajo circunstancias específicas, como en Colombia en los años 80, los actores armados crearon y recrearon su propio contexto social y político de generación de la violencia. Así cambia el enfoque sobre el carácter de la “iniciativa política” y, desde la crítica que hacemos a la tipología de Pizarro, se modificaría la mirada sobre el llamado “tipo militar”.

Precisemos entonces que Pizarro concibe lo societal como una inserción directa en la acción de un sector social, una especie de compromiso interno. Idealiza a este tipo y se olvida de las mediaciones presentes en la relación entre movimientos sociales y violencia. El Quintín Lame tendría objetivos y relaciones con actores que rebasarían la interacción entre grupo y comunidad indígena. Esta idealización opera en función de negarle una referencia social a cualquier grupo vanguardista o de predominio militar. El tipo militar y el *partisano* de manera relativa lo atribuye a los designios de la subjetividad extrema de sus gestores, cercana a la del terrorismo, al menos en la noción que sobre este punto tiene Michel Wieviorka (1988, pp. 15-71).

Se puede avanzar en otro sentido en las relaciones de los grupos con sectores sociales si se amplía la noción de “expresión social”, que es restrictiva en el enfoque de Pizarro al plantearla en el nivel de una representatividad que, inferimos, es directa y democrática.

En las condiciones de desarrollo de procesos armados es difícil realizar consideraciones de *representación* social, gremial o política. Generalmente los grupos sostienen intercambios con sectores reducidos de los grupos o clases sociales y desde ellos extienden sus redes sociales sin llegar a abarcar el universo. Son intercambios que no se dan en abstracto y sí en contextos históricos específicos. No se puede olvidar que en Colombia lo social y especialmente lo político están dominados por relaciones que semejan un mercado y que debilitan enormemente el proceso de las representaciones democráticas. Así que los análisis sobre lo social y lo político en la guerrilla deben abordarse desde otras nociones y en un tipo de relación diferente.

Avanzando, diríamos que ni siquiera para las FARC pudiera pensarse en una representación democrática del sector campesino, a pesar del trabajo de masas del partido comunista. Sus raíces en las lógicas de *la Violencia* crearon formas de exclusión política y social frente a campesinos asentados desde antes en las zonas de colonización, a las que llegaban los grupos de autodefensa comunista en su repliegue frente a la represión (González 1992, pp. 43-116). Esos campesinos eran excluidos y desplazados de sus tierras bajo las formas de la presión armada,

cuando no accedían a ser partícipes de sus directrices comunistas o cuando pertenecían a otros partidos o cuando deseaban mantener distancia con el proceso de lo armado. No prevaleció en la autodefensa campesina comunista el criterio de clase social, que en algún momento fue la base de acuerdos con las guerrillas liberales, sino el criterio de la división política entre guerrillas lo que llevó a fuertes confrontaciones dentro del propio campesinado. Voluntario o no este proceso de exclusión y de conflicto limitó la idílica representatividad social de las autodefensas comunistas y luego de las FARC, que portaban esa experiencia de asentamiento territorial y de relación con la población, reeditando una historia problemática.

En la llamada guerrilla militar, el ELN, si ampliamos el sentido de una “expresión social” y no lo reducimos a una representación directa, encontraríamos en los años 60 relaciones de esa guerrilla con movimientos sociales urbanos, en los cuales tenía audiencia. Será en el orden de las continuidades subjetivas de la violencia que sus fundadores van a impulsar de nuevo el medio rural como centro de su acción. Sus miembros fundadores, dentro de una dimensión más amplia de resistencia y oposición política en Colombia, se atenían a la imagen dominante de un campo convulsionado y apto para la violencia revolucionaria, donde un supuesto campesinado revolucionario, liberal democrático, había sido engañado por sus dirigentes o avasallado por la represión y las instituciones conservadoras.

Esta imagen y otras que se le adjuntan desembocaron luego en representaciones políticas y académicas más elaboradas que en general interpretarían las luchas campesinas como una revolución agraria frustrada y la violencia como una guerra civil. Eran representaciones que se compartían en el espectro de la oposición incluyendo el partido comunista. La relación práctica con la experiencia cubana abrió el reconocimiento de la estrategia revolucionaria posible desde el campo, pero no le aportó la idea sustantiva de su posibilidad, ésta llegó por vía del examen propio de lo acontecido en el mundo rural. Ambos elementos confluyeron para el montaje de la guerrilla rural. De no existir esta confluencia, la red de ciudades en Colombia hubiera sido percibida como el escenario propicio para una oposición política armada más fuerte y acorde con las fuentes urbanas de su desarrollo. Pero las experiencias notables de resistencia y oposición en Colombia habían sido más rurales que urbanas. Lo contrario sucedió en Uruguay, donde experimentos similares de implantación de focos en las ciudades puede explicarse por las particularidades de sus contextos sociales, políticos e históricos de resistencia.

Efectivamente, *esa idealización cultural de un campo en resistencia* le presta su fuerza a la idea pragmática de recuperar para la revolución las zonas de la anterior violencia y a la apropiación de la experiencia rural cubana, impulsada además por la confianza en el éxito del modelo. “Lo que buscábamos en la revolución cubana era una estrategia que permitiera integrar esa experiencia en un proyecto de poder”, reseña un dirigente del ELN refiriéndose a la experiencia rural de violencia (Harnecker 1988, p. 32). Sin embargo, esta apropiación no

niega de inmediato el vínculo social con las clases medias urbanas en formación, el movimiento estudiantil nacional de los años 60; ni con grupos del sindicalismo obrero que avanzaban hacia una independencia de las centrales sindicales bajo dominio liberal, conservador y eclesiástico; ni con los sectores populares de la ciudad involucrados en la intención del Frente Unido del cura Camilo Torres, intervenidos luego por los sacerdotes de la 'Teología de la liberación'.

Un indicador indirecto de la importancia de estos lazos sociales se observa al examinar la primera fase de declive del ELN hacia 1973, que dura hasta mediados de los años 80: su crisis no fue un resultado exclusivo de la represión militar, en ella obró el aislamiento propiciado por la nueva oleada de movimientos sociales urbanos, entre ellos el nuevo movimiento estudiantil y el de maestros. Éstos en los años 70 no miraban ya hacia el campo como el escenario principal de la resistencia y eso los separaba del ELN. Esos movimientos adoptaron unos objetivos propios y urbanos de confrontación social y se alejaban de la ideación de la guerrilla en el monte, disminuyendo su expectativa por el ELN. Coincide además ese declive del ELN con la acción de algunas huelgas obreras (Vanitex, Riopaila...) que avanzaron hacia expresiones de clase en la búsqueda de un lugar propio en los conflictos sociales. También el progreso en la lucha de los trabajadores estatales, hacia 1975, tiene una perspectiva distinta a la del ideal de las armas en el campo. Era un alejamiento del ELN en un doble sentido: como ilusión y práctica de los antiguos activistas orientados hacia la guerrilla; como ilusión y práctica de "la acción colectiva" que en los años 60 se suponía que abría la cobertura política y social a la acción armada en el campo.

Estas modificaciones en los movimientos sociales dejan solo al ELN por un largo período, a lo que se suma el inicio de una fuerte crisis económica e industrial del país. Ésta puso a la defensiva al movimiento obrero llevándolo a niveles de desintegración de sus núcleos colectivos, individualizando a sus activistas, muchos de los cuales fueron absorbidos por los cambios sociales y económicos propiciados por los negocios ilegales, una absorción que fue generalizada en muchas dimensiones de la sociedad colombiana.

Resumiendo este punto crítico, diríamos que las relaciones de los grupos políticos, civiles o armados, con las bases sociales nombradas en sus discursos como aquellas con las cuales se relacionan y de donde derivan su legitimación, están asociadas a intercambios instrumentales de doble vía, al estilo de los intercambios mercantiles. Tal como sucede en muchos ámbitos de la vida pública del país. Las guerrillas no se proponen niveles de representación social y política sino inserciones en las clases y grupos sociales de donde se derivan réditos, beneficios y costos de orden instrumental. Se intercambian apoyos políticos y logísticos por ciertos beneficios económicos, sociales y políticos como los de la protección. De otra parte, estos intercambios se dan dentro de procesos de poder y de exclusión social y política, que ligan con una forma de la violencia política de los años 50. Así pues, una dimensión de la política y de la relación social que no son nuevas.

Realicemos ahora un breve recorrido por el segundo eje de la tipología de Pizarro: la relación entre lo político y lo militar, examinada por él desde el punto de vista de la ideología que tiene cada agrupación, donde pareciera que los grupos apuntaran a objetivos revolucionarios fijos. Validaríamos su enfoque si los proyectos militares y políticos de los grupos tuvieran estabilidad y fijeza en el tiempo, pero la experiencia revela siempre una diferencia entre su teoría y su práctica, que los lleva a cambios constantes y circunstanciales de esa relación.

Normalmente las guerrillas de los años 60 y 70 fueron reactivas frente a las situaciones cambiantes del régimen social y político y frente a las condiciones internacionales. Habrá que esperar a los años 80 para que ese perfil reactivo tendiera a desaparecer y, en ese caso, el M-19 con su tipo de acción impulsará el cambio principal. También las FARC decidieron emprender la ofensiva militar en 1982, pero en 1984 tomarían la iniciativa de intervenir en el nivel político insertándose en “diálogos de paz” siguiendo a otros actores armados (el partido comunista las había mantenido alejadas del escenario político y reducidas en el letargo de sus dominios rurales de frontera). A otros grupos los cambios les llegaron más tarde, como al EPL adormecido en los designios de su ideología maoísta,¹³ en territorios de colonización y de frontera agrícola en el noroccidente del país.

En términos generales se puede aceptar que la relación entre lo militar y lo político pasó siempre en los grupos armados por suponer una crisis definitiva del Frente Nacional, no identificada por ellos con la crisis de la dominación *ideológica*. Esos grupos exageraban en la idea de una rigidez y un inmovilismo del régimen democrático del Frente Nacional, basados en un conocimiento precario de la dinámica de la sociedad colombiana. Tenían la expectativa de que una oportunidad llegaría para cruzar el juego de sus alternativas con insurgencias sociales autónomas conducentes a cambios profundos. Esta idea producía su parálisis militar en zonas de refugio como lo denunciaron los del M-19. Las FARC y el EPL no tuvieron iniciativas para producir tal crisis política, como sugiere Pizarro, no hay la prueba de acciones referidas a ello. Aunque contaban con “unas condiciones objetivas dadas”, las guerrillas no se reducían a lo militar y ese presupuesto les definía objetivos en el campo ideológico y reconocerlo tampoco quiere decir que ellas se expliquen por la ideología. Por su parte, el militarismo tiene parámetros socio-culturales más que ideológicos.

Fue el M-19 quien actuó para producir una crisis política y social del régimen político. Los dirigentes del ELN lo reconocen señalando que el M-19 llenó un vacío de proyecto político en el conjunto de la guerrilla entre 1973 y el comienzo de los años 80. Sostienen, además, que el M-19 propuso una noción de la política como una confrontación más general con el régimen, rebasando su noción de política como el trabajo en “sectores de masas” en lo local y lo regional

¹³ El del Epl si es un caso notable de construcción desde una ideología teórica. Ver las obras ya citadas.

(Harnecker 1988, pp. 63-68), que en nuestra consideración se concretaba en intercambios sociales de diverso orden.

El M-19 dio así relatividad a sus objetivos (tercer eje de la tipología de Pizarro) y sacó a la luz los límites de lo deseable a alcanzar en las estrategias a mediano y largo plazo del conjunto de los grupos. Pero recordemos que si las metas en cada uno de esos grupos se presentaban con gran énfasis en su ideología, en su práctica política adquirirían flexibilidad dependiendo de las correlaciones de fuerza con el Estado, del escenario internacional y en particular de los ciclos de la violencia (se revela esa fluidez en esa gran adaptación de la guerrilla a todas las condiciones de desregulación social que imponía el narcotráfico a la sociedad colombiana). En general los grupos guerrilleros pasaron por diferentes objetivos según el momento y la conveniencia de sus estrategias. El ELN que tenía como radical “caballo de batalla” la nacionalización de los recursos naturales terminó por entrar en negociaciones tácticas con las multinacionales que los explotaban. Las FARC, intransigentes en la demanda de una reforma agraria, se resolvieron a ceder terreno refugiándose en las zonas de colonización, realizando su presión sobre los grandes propietarios pero también negociando con ellos y hasta defendiéndolos frente a los movimientos comunitarios rurales que pretendían hacerse con la tierra (por ejemplo en el Cauca).

Es difícil determinar, por fuera de un análisis específico, el grado de intensidad en la adopción de determinados objetivos por cada grupo tanto como una definición de los amigos y de los enemigos a enfocar en sus estrategias. Si en algún momento fueron fijos y claros, variaron con el tiempo. Pizarro acierta en un principio en este punto sobre el ELN, las FARC y el EPL, mas no en el caso del Quintín Lame, pues a pesar de su inspiración local y societal, su participación en la Coordinadora Guerrillera nos dice que sus objetivos y su definición de los enemigos podrían ser similares a los de sus aliados. El M-19 fue quien mayores variaciones sufrió en el tiempo, pero también el que mayor coherencia quiso darles en su condición de opositor político directo.

En cuanto al cuarto eje de la tipología, la relación de las guerrillas con las bases sociales, no es posible discernir una negativa general de ellas a impulsar sus reivindicaciones y a proveer los procedimientos para conquistarlas, como sostiene Pizarro. Todo lo contrario, en su impulso se centraba una concepción de la política, y del trabajo político, limitada a procesos de intercambio con las bases. Esta limitación tampoco quiere decir que negaran lo social y la relación política. La guerrilla operó como los partidos de izquierda, estrechando el rol y la importancia de los sectores sociales al desviar sus acciones hacia reivindicaciones limitadas, locales y sectoriales, sin retar las formas más esenciales de la regulación social (asunto postergado para después de la “toma del poder”). Los instrumentó con la venia de los mismos movimientos sociales y populares, adaptados como siempre a una sobrecarga de politización en sus orientaciones justamente debida a las relaciones de intercambio. De ese modo, esta forma predominante de lograr influencia en ellos los reduce a las reivindicaciones y les niega una inspiración política autónoma, amplia y

ambiciosa. En otras ocasiones la guerrilla sustituyó a los movimientos, como en el caso del M-19 en la solución del conflicto en Indupalma en 1977.

Esas relaciones entre guerrillas y bases sociales no estaban en el “deber ser” de relaciones de representación social, y es necesario reconocer su naturaleza. Ellas se perfilaron con el paso del tiempo como relaciones de intercambio y de uso instrumental y también de sometimiento con la aparición de economías emergentes o de explotación de recursos naturales en sus zonas de dominio. En esta lógica del intercambio similar a la del mercado, radican las fortalezas y debilidades de la legitimidad política de las guerrillas. Así solamente logran dimensiones parciales de legitimación en las bases sociales, lo que hace superfluo buscar el sentido político deseado por Pizarro de una representatividad democrática. La política cambia de giro hacia el desarrollo de la fuerza y de los poderes económicos y políticos de la guerrilla. Se termina en condiciones de dominio territorial y poblacional en lo rural, o dominio sectorial en lo urbano. Será en el análisis de este quinto y último eje donde Pizarro tendrá más aciertos, aunque es necesario replantearse con más decisión las formas de implantación de las FARC y por supuesto las relaciones del Quintín Lame con el territorio y la población indígena del Cauca.

Para el caso del M-19, aunque siempre tuvo referencias a la escena democrática pretendiendo movilizaciones generales, en sus inicios actuó en otro sentido frente a las huelgas obreras. Realizó acciones demostrativas de poder frente a los empresarios para ejemplificar el camino de la vía armada, aunque había en ellas sentidos de protección. Sus acciones de sabotaje terrorista terminaban alejando a las bases. Luego, al lanzarse en una relación más decidida y compleja frente al escenario de la política, buscando la ampliación de la participación democrática y usando la amenaza y la realidad de las armas como soporte principal, mantuvo relaciones sustantivas e instrumentales con diferentes bases sociales, con la clase media, con estudiantes y bases populares, con campesinos e indígenas. Su complejidad requiere mayores esfuerzos de desciframiento, pues fue el M-19 quien inauguró el escenario de las acciones urbanas y modificó la relación de “refugio” de la guerrilla con los territorios rurales, orientándolos hacia una confrontación militar ofensiva, a veces con control de posiciones.

El uso de la noción de contexto de violencia como alternativa de enfoque

Aquí asociamos a las guerrillas con contextos de violencia diversos. Esta alternativa no debe confundirse con una idea de encasillar la violencia guerrillera dentro de una continuidad de la violencia de los años 50. Las guerrillas representan otros sentidos de la violencia política, generados en contextos diferentes y por lo tanto con rupturas con aquélla. Desde esta diferencia es necesario formular para cada grupo sus posibles continuidades con *la Violencia*,

incluso en un grupo como las FARC. Lo que sigue es únicamente la apertura de este análisis.

En general los grupos armados retomaron de la *Violencia* de los años 46-54 la representación de que lo político y lo social implicaban la violencia (Pécaut 1986, p. 488) y sus impulsores intentaron aprovechar las huellas que subsistían de aquella. El M-19 también se inscribió en esa representación, aunque le dio relatividad cuando instauró una disputa por la democracia, buscando la correlación entre cambios políticos y participación social. Aprovechó además la nueva violencia difusa y desorganizada de los años 80 en los entornos sociales donde actuaba.

Las FARC están ancladas *en el contexto de la Violencia*: una relación con las luchas agrarias nacidas en él y con la formación de autodefensas campesinas en el suroccidente y centro del país. Tienen continuidades directas y rupturas cualitativas dentro del proceso largo de su constitución como guerrilla. Ellas no emergieron en zonas cafeteras de la antigua violencia, aunque en éstas estuviera el origen social y regional de sus gestores e iniciaran allí su carrera de violencia. Lo que son indicios individuales no pueden generalizarse como hechos colectivos. Las FARC tuvieron también ese pasado de influencias del partido comunista en otras zonas, asociadas con golpes propinados por las luchas agrarias a grandes propietarios (Pizarro 1991^a, pp. 195-198 y Palacios 1999, p. 348). En general el análisis de estos antecedentes es objeto de polémicas. William Ramírez minimiza la subordinación al P.C. y acentúa el carácter campesino y de colonización. Acierta en señalar que la reconversión de las autodefensas en las FARC no obedeció a “un replanteamiento político-estratégico de carácter fundamental” (Ramírez 1990, pp. 68-71). Sin embargo olvida Ramírez que fundadas como FARC en un nuevo contexto de violencia, el guerrillero, los cambios estratégicos vendrían a mediano plazo.

Las FARC como guerrilla que apunta al poder del Estado se forman en 1966. El partido comunista en su X Pleno en enero de ese año apoya su constitución. Nacieron de una II Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur formando parte de un Frente Democrático de Liberación Nacional (Villamizar 2002, pp. 183-184 y Pizarro, 1991^a, pp. 195-198). Nacen en zonas de colonización, proviniendo de las llamadas “repúblicas independientes”, que tenían a su vez ese carácter de ampliación de la frontera agrícola (a excepción de la zona del Sumapaz y otras del Tolima). Sus dirigentes fueron de origen campesino y aldeano, una combinación entre lo rural y lo urbano en su formación social. Manuel Marulanda, su máximo dirigente, es de origen campesino, pero cuando se enroló en la violencia ya era un comerciante y un intermediario contratista con cierta prosperidad y luego, con la paz firmada en 1959, llegó a ser inspector de carreteras (Alape 1989). Sobre esos rasgos complejos se pueden sacar valiosas conclusiones que dan relatividad a la condición social campesina del grupo.

En el caso del ELN, su primera columna se reúne en julio del 64 en San Vicente de Chucurí, Santander del Sur, pero sale a la luz pública el 7 de enero de 1965 con la toma de Simacota. Es una guerrilla de orientación no comunista y con relaciones con Cuba, guerrilla que desea reeditar relaciones con *la Violencia*. En su zona de implantación quisieron impulsar a sectores aldeanos y campesinos movilizados en los 50, entre ellos buscaron “redes de apoyo” especialmente entre los disidentes liberales de la época provenientes del gaitanismo, militantes aún radicales y que de nuevo orientaban a los jóvenes aldeanos de los años 60 hacia la violencia (Vargas 1992, p. 188).¹⁴ El ELN tuvo relación con jóvenes comunistas radicales (se destaca Medina Morón por su desarrollo intelectual y político, y como práctico a Heliodoro Ochoa) y de la izquierda disidente del Movimiento Revolucionario Liberal,¹⁵ la Juventud del MRL, jóvenes todos fundadores. Pero tuvo además el apoyo de una intelectualidad emergente simpatizante del socialismo cubano, ligada en su mayoría al MRL, que le da un perfil distinto a su horizonte de oposición al acuerdo del Frente Nacional.

Sobre el ELN algunos señalan una continuidad sin mediaciones de la violencia anterior. Donde nosotros vemos un esfuerzo por reeditar una rebeldía radical, un “medio violento”, por ejemplo Wickham-Crowley ve una continuidad directa, basada en una supuesta condición favorable a la guerrilla en la masa de los campesinos, que era la ilusión de los fundadores del ELN (Wickham-Crowley 2001, pp. 157-166). Estos eran urbanos y necesitaron de una larga crisis para reconocer que no había apoyos campesinos automáticos. De hecho habían actuado frente a esa masa con prudencia y hasta desconfianza. Otros como Alejo Vargas, con mejor sentido, hace énfasis en la permanencia de los valores de las armas, de actitudes prácticas para la violencia y de ideaciones de resistencia al Estado. Sin embargo, presupone que esos aspectos se dan silvestres o se transmiten en *forma directa* de padres a hijos en la región de Santander. Por ello Vargas denominará el surgimiento del ELN como “la síntesis de los procesos” (Vargas 1992, p. 183). El primero pasa por alto que la continuidad tiene aspectos diferentes a los pragmáticos de una supuesta participación generalizada de los campesinos. El segundo no ha explorado mucho el aspecto sociológico relevante de *la orientación* que pretendía la reproducción de la violencia: su asentamiento en cuerpos “semi-estamentales”, la familia y la vecindad local y regional.

Existió un impulso para reproducir el lugar central del conflicto político en esas zonas, que a la vez que en torno a él podía unificar sus relaciones políticas, desintegraría los mundos micro sociales agrarios experimentados entre el pasado y el presente de la violencia. Se deseaba movilizar a los campesinos en un nuevo proyecto de violencia, para enarbolarlo por los hijos de quienes de generación en

¹⁴ José Ayala, ex cabo del ejército, hombre de corte militar, formó un núcleo de jóvenes campesinos sin claridad en lo armado, núcleo que ingresará al Eln.

¹⁵ El MRL dirigido por Alfonso López M. fue opositor al acuerdo del Frente Nacional. Esa facción de izquierda surgió en la Convención de Girardot, mayo de 1960 (Vargas A. 1992, p. 158).

generación, desde los años 20, habían tomado las armas, como lo indica Alejo Vargas para los primeros militantes. Aquí examinamos ese imaginario del ELN. Bajo la ilusión de banderas revolucionarias se asociaba *la construcción* de una memoria política a la reedición de un mundo tradicional, de relaciones culturales y sociales estrechas entre hijos, padres y abuelos, para ser atravesadas de nuevo por la violencia. Más allá de los discursos nacionalistas y de desarrollo económico, la guerrilla en lo micro social impulsaba hacia el pasado. Por fuera de la eficacia de esta orientación que enfrentaba situaciones nuevas de contexto histórico, se puede evaluar cómo a través de esos cuerpos “semi-estamentales” se pretendía reproducir un orden social anclado en las subculturas políticas que son obstáculo a la formación de la modernidad y que impiden el florecimiento de las individualidades, su autonomía en la construcción de reconocimientos personales más allá de “las cargas del pasado de violencia” familiar o local.

Será dentro de las continuidades no visibles de la anterior violencia, que el predominio en la dirección del ELN termine en manos de sectores militaristas y campesinos. Coincidieron campesinos de la zona de los Santanderes y jefes aldeanos provenientes de regiones donde las huellas de un patriarcado colonizador exigente de lealtades morales familiares se mezclaban con la visión de los negocios, el cálculo en los intercambios y en las situaciones de poder, y la religiosidad católica. Esta idea no coincide con el argumento de una “desviación campesinista”, originada según los dirigentes del ELN en la polémica con los comunistas sobre principios estratégicos, por volver absoluta la lucha armada y además por reivindicar al campesinado como más combativo, ante terratenientes y gamonales, que la clase obrera reformista, reivindicada por el partido comunista como el actor principal (Harnecker 1988, pp. 33-36). No obstante, nuestra hipótesis sobre la hegemonía campesina es que ella tiene una base mayor de origen práctico (cultural antropológico) que de ideología, aunque tenía cobertura política.

Esa hegemonía campesina es el encuentro de aspectos que sobrepasaron a los elementos racionalizadores provenientes de miembros urbanos, con una reciente formación ilustrada (líderes universitarios y obreros con formación). Se impusieron los valores pragmáticos de esas jerarquías, agudizados por el aislamiento de la selva y la montaña. Se mezclaron con valores de un ámbito rural-aldeano individualizado en pequeñas propiedades de diverso origen. Este era un contexto atravesado por lógicas de poder movilizadas tradicionalmente por las clientelas de partido y por luchas inter partidistas, que afectaron la distribución de la tierra y los intercambios sociales reeditando oposiciones radicales de amigo y enemigo. Además era un ámbito campesino que articulaba una cultura de la desconfianza, de la rudeza y del machismo; en él la conscripción militar y las armas jugaban el papel de ritual de paso a la vida adulta; simbolizaban un poder y una superación personal, que coincidía con formas del cristianismo rural. Éste es reforzado por la orientación del grupo, cuando los dirigentes del ELN afirman al cristianismo como supuesto elemento de identidad social y nacional del campesinado enrolado (Harnecker 1988, pp. 20-22).

Desde esta perspectiva habrá que pensar más en el sentido de la *traición, el martirio y el sacrificio* como valores de esa cosmovisión cristiana inserta en los conflictos internos del grupo. Lo que sabemos es que todos estos aspectos subjetivos se tradujeron en unos códigos ciegos y de aplicación automática que internaron a la propia violencia dentro del grupo. Está para valorarse en ese sentido el testimonio de Medardo Correa (1997). Además, el relativo aislamiento en los años 50 de un campo violento respecto de nuevos procesos de modernidad del país sería reproducido más tarde en la guerrilla. El cruce de las diferencias de clase y la división social entre campo y ciudad se enmascaró en ese moralismo político que, además de imponer patrones de comportamiento, definió criterios de su validación y distribuyó poderes de acuerdo a ese cruce creando fuertes tensiones internas.

Esa hegemonía en el ELN daría a su ideología política un fuerte rasgo moral que exaltaba los valores de la fortaleza campesina para la milicia y fustigaba la debilidad física y subjetiva de los militantes provenientes de la ciudad, el grueso del núcleo inicial, de lo cual se tomaba como una prueba la propensión al debate y a la discusión racional por los urbanos (Correa 1997). La apropiación del “cristianismo católico” puesto al servicio del pueblo reforzaría esta tendencia a inclinarse ante la preparación “natural” de los campesinos para afrontar la rudeza de las condiciones de la lucha. Las reservas de activistas urbanos sobre el ELN, como elemento de su crisis, se originan en esa hegemonía rural aldeana, luego de las ejecuciones internas de la primera generación de guerrilleros urbanos (los ideólogos). El ELN inauguró una supresión de la relación de los intelectuales con la política radical de izquierda¹⁶ (una revancha del campo frente al dominio de la ciudad; la muerte azarosa de Camilo sería un signo más). Después de abril de 1982, la vertiente humanista del cristianismo será puesta en juego por su dirigencia para la reelaboración interna, la crítica y la superación del drama de su primera fase.

A pesar de las continuidades, el ELN se ubica en el orden de las rupturas con *la Violencia* al aspirar a *la toma del poder del Estado* y a una guerra de liberación nacional, motivaciones no presentes en “las autodefensas campesinas” y retardadas en las FARC, más orientadas hacia la demanda de reforma y legalización de tierras por el régimen. Esa aspiración cristaliza *un nuevo y primer contexto de violencia guerrillera* (es el primer grupo con esa faceta pública de ruptura política) y en él involucró desde 1964 distintos sectores: activistas y entornos obreros, especialmente los petroleros del oriente colombiano; movimientos urbanos como el estudiantil, donde contó con el apoyo de un amplio sector de universitarios, líderes y activistas movilizados en un momento de expansión de la educación superior en Colombia. Alrededor de 1976, a pesar de su crisis profunda, contó con una inserción en el sindicalismo independiente y en

¹⁶ Sobre la relación entre intelectuales y política en Colombia ver Gonzalo Sánchez (1998).

ese nuevo contexto de las disidencias religiosas con el catolicismo conservador tuvo la simpatía de los jóvenes miembros religiosos de esa rebelión, de sus redes de catequesis y de trabajo comunitario, en barrios de invasión formados por población de origen campesino (Harnecker 1988, pp. 12-15).

A nuestra discusión sobre la amplitud de “una expresión social”, uno de los dirigentes del ELN le brinda una pista al señalar que independientemente de la guerrilla rural en crisis, y a espaldas de su dirección, se dio ese trabajo barrial y sindical simpatizante con el ELN. Se resalta que su entorno social y político era más amplio que el creado en una iniciativa dirigida por su jerarquía (Harnecker 1988, pp. 70-71). La figura del cura Camilo ligada al ELN, sobre la cual se hicieron esfuerzos para erigirla en fuerza simbólica desde 1978, jugó su papel en esos entornos locales. Esta forma de relación social significó a la larga la supervivencia del ELN.

Por otro lado, el Quintín Lame emerge en *el contexto de una violencia compleja de los años 80* y en el territorio del Cauca, centro del conflicto armado de guerrilla cuyo eje era el M-19. En la gestación del Quintín y en su desarrollo participan miembros y líderes de las comunidades indígenas pero también las guerrillas de ese contexto. Bajo esta influencia cambiará su nombre, pasando de Comando a Movimiento Armado. Se daba curso a una real ideación de guerrilla así se compusiera por indígenas y a pesar de su declaración pública de tener objetivos en torno a las comunidades. Desde otro ángulo el efecto producido es el contrario, como lo dice Christian Gros, “La guerrilla fue también en el seno del mundo rural la ocasión propicia para el descubrimiento de la dimensión comunitaria y de su fuerza, y la oportunidad para experimentar la capacidad de movilización de los campesinos indígenas” (Gros 1991, pp. 107-108). Veamos los datos importantes:

La primera idea de una defensa armada de los indígenas se gesta luego del asesinato del “cura rojo” Pedro Rodríguez y del dirigente agrario Gustavo Mejía en 1974, en Corinto. Proviene de grupos de estudio de indígenas sobre el marxismo, orientados por el PC-ML de Popayán, en actividad desde 1973 y que apoyaban las recuperaciones de tierra. Buscaron el entrenamiento militar del EPL, aunque los vínculos se rompen pronto en 1975. El aspecto armado no fructificó. Luego en 1977 se retomaron las escuelas militares bajo la colaboración del M-19 (Bateman, Iván Marino Ospina y Peregoyo estuvieron en la experiencia). Esta vez fructificó “un grupo móvil de autodefensa” que cumplía “funciones de policía”, que desalojó de la región a las bandas asesinas de líderes e indígenas. Pero no avanzó como guerrilla tal como era la intención e incluso se vio denunciado por las propias comunidades. Nunca enfrentaron al Ejército. Sus miembros sufrieron la cárcel con el Estatuto de Seguridad en 1979 y salieron con la amnistía de Betancur. La cárcel fue una “escuela de formación” en el contacto con otros guerrilleros.

Entre 1982 y 1984 esos dirigentes excarcelados retoman la iniciativa y crean el Comando Quintín Lame bajo el *leitmotiv* de defender las comunidades en ese contexto de actores armados, siendo apoyados en la logística por el Ricardo

Franco. El desalojo de la hacienda López Adentro por bandas armadas dirigidas por uno de los ingenios azucareros afectado por la invasión indígena de la hacienda, y coordinado con fuerzas del Estado, lleva a otra dimensión cualitativa al Comando. Realiza en enero de 1985 la toma de Santander de Quilichao, norte del Cauca, en acción conjunta con el Ricardo Franco, el grupo mejor equipado militarmente en la época. La toma a todas luces es una acción ofensiva frente al Estado y las élites y sus actores de violencia, es una reacción no espontánea. Con otros operativos y bajo la influencia del M-19 y de la Coordinadora Nacional Guerrillera, toma el nombre de Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, superando la autodefensa: “salimos de la Picota [...] con la concepción de montar un movimiento realmente de las comunidades indígenas, con *una concepción no indigenista*” (Peñaranda 1992).

Por su parte el M-19 atraviesa desde 1974 distintas fases, definidas por tipos de acción y cambios de estrategias impulsados en su interacción con actores institucionales e ilegales. Son fases asociadas a contextos de violencia guerrillera, el de los años 60 y el que va de fines de los 70 a mediados de los 80. De este último contexto el M-19 es puntal principal, aunque al final del último período la violencia del narcotráfico ocupará el lugar predominante.

La violencia revolucionaria del M-19 no tiene relación directa, como “acción colectiva”, con el contexto de la Violencia de los años 46-64, aunque hay efectos en el grupo provenientes unos de la trayectoria personal de algunos de sus miembros y otros derivados de la referencia a ella cuando el grupo se volcó de nuevo a una iniciativa armada en el campo. Esta referencia a *la Violencia* cumplió un papel motriz en el orden del imaginario para emprender de nuevo esa acción armada. Sus líderes para construir “una memoria colectiva de grupo” recordaban esas experiencias individuales de violencia sufridas en la infancia por algunos de sus miembros. Sin embargo, creemos que si bien estas experiencias guían enrolamientos y motivaciones individuales, ellas no tienen el peso suficiente para definir al M-19 en tanto colectivo como un fenómeno anclado en aquélla. Habría otros elementos de larga duración presentes en el régimen político y en la conducta histórica de las élites, a los cuales la iniciativa del M-19 enfrentó pero ya desde las condiciones de su época, lo que coloca su acción colectiva en otro contexto.

Más significativa es la experiencia de participación política y armada de sus dirigentes, entre los cuales Iván Marino Ospina y Afranio Parra tuvieron en la infancia relaciones con la violencia de los años 50. Nos referimos a los enrolamientos de los fundadores con el contexto de guerrilla inaugurado a mediados de los años 60. Esta experiencia le permite al M-19 impulsar una reproducción ampliada de la empresa armada. En lo nacional el M-19 saca provecho de las guerrillas en crisis. Se nutre además del impacto del narcotráfico en las instituciones y de la imposición de sus 'reglas del juego',¹⁷ lo que le permite

¹⁷ En ese sentido propone la relación Armel en su entrevista, septiembre de 1996.

relacionarse con otros actores institucionales como éste lo hacía. Se apoya además en mutuas interacciones, trazadas por redes de amistad y de interés. Se apropiatambién de experiencias inusuales en Colombia puestas en práctica en otros países de la región.

Ese proceso de reproducción ampliada de la violencia de izquierda le da al M-19 un protagonismo en la gestación de un nuevo contexto de violencia, al menos hasta 1986. El M-19 al final de los años 70 asume acciones de mayor calibre político-militar, algo inusual en los anteriores grupos guerrilleros, incluyendo a las FARC. En su forma práctica y en sus resultados, esa violencia del M-19 marca la diferencia con lo acontecido en las tres décadas anteriores, en las cuales el escenario principal fue el mundo rural. El M-19 emerge y actúa como grupo urbano durante 5 años, una ruptura significativa con procesos anteriores. Además en la forma de su presencia política se puede ver representado por primera vez en la izquierda un reconocimiento problemático del país urbano que dominaba ya en Colombia al menos desde los años 60.

A pesar de esa tradición urbana, la dirigencia del M-19, a comienzos de los años 80, remite su origen tardía y discursivamente a una continuidad de la Violencia de los 50. Fue un recurso después de los duros golpes sufridos bajo la represión estatal. Esa imagen entra en el conjunto de su ideología¹⁸ para presidir un nuevo y largo aliento de acción armada rural en el sur del país, Putumayo y Caquetá. Con ella orientó a los nuevos contingentes campesinos¹⁹ y populares urbanos en oposición radical al Estado y a las Fuerzas Armadas, que fueron definidas estratégicamente en ese momento como su enemigo principal. Esa práctica rural fue una paradoja, en un grupo nacido urbano y que asocia sus acciones al plano de la opinión pública.

En el nuevo contexto de violencia desde fines de los años 70, está comprometida una intensificación de la lucha guerrillera hasta fines de los 80, cuando se abren las conversaciones de un proceso de paz culminado en 1990 con la entrega de armas, primero por el M-19 y luego por el EPL y otros grupos de menor envergadura. Ya destacamos en este contexto el impacto del narcotráfico que con un poder excesivo en lo económico, lo político y lo cultural, se irá

¹⁸ Aquí la noción de ideología remite a la concurrencia de ideas de origen, orden y escala diferente, cuyo único patrón de unidad lo constituía la figura y la autoridad del líder, Bateman, quien ofrecía argumentos apoyado más en su experiencia que en una reflexión. A la Octava Conferencia (Putumayo, agosto de 1982) concurren una variedad de participantes con preferencias, historias e ideologías diversas, produciendo un resultado ambiguo en su confluencia (“el sancocho nacional”).

¹⁹ “Dentro los 10 jornaleros había *un paisa de la violencia*, que conocía la violencia de lo que había pasado en los años 40, eso nos contaba todo el cuento [...] del “Tiro Fijo”, “Sangre Negra”, “chusmeros”, guerrilleros, pero que ser revolucionario es lindo a morir por una causa justa, a mi me llamaba la atención por ese lado y qué lindo uno morir peleando pero no allí arrodillado [...] el señor nos dio como muchas orientaciones, pero como en una charla normal”, Rigo, indígena del Putumayo, septiembre 2000.

perfilando como su actor principal. Esta presencia modifica al conflicto guerrillero²⁰ tanto como el destino de las instituciones sociales y políticas que entraban en el campo de su interacción.

Los perfiles del M-19

Ahora precisamos la diferencia del M-19 en su iniciativa política con la tradición de las guerrillas. Recordemos con Eleazar Ben Rafael (1986) un aspecto central del “modelo clásico” de guerrilla, al cual se adscribía esa tradición: el conflicto armado era una relación de confrontación tipo centro-periferia alrededor de la cual se organizaban los otros rasgos técnicos y políticos de la guerrilla. Ben Rafael estima que en ese modelo el centro político es el principal codificador de la confrontación y la iniciativa es del régimen, sea ésta coercitiva o política.

En general, nuestras guerrillas se ubicaron en la periferia de la acción estatal, espacial y temporalmente: con fortaleza en zonas de montaña y colonización y con estrategias de largo plazo. Así su práctica armada estaba lejos de orientar sus acciones al escenario político institucional y a la conquista del poder, aunque se hablara de ésta. La política, asociada a ese escenario, estaba disociada de lo armado, y en lo militar seguían la táctica de “golpear y huir”, esperando fortalecerse en el “largo plazo”. Los momentos álgidos de la confrontación corrían por la iniciativa del Estado, realizada en forma periódica y con un éxito notable hacia mediados de los años 70.

Por su parte el M-19,²¹ en primer lugar, toma como objetivo de su acción armada los aspectos institucionales, apunta a estar en el centro de la escena política, se plantea en lo inmediato el problema del poder y trata de resolverlo de manera diferente a la “guerrilla convencional”. Busca en la escena política un interlocutor, dejando de ser la violencia el despliegue de la agresión física. En la confrontación con el ejército toma la iniciativa y, en sus mejores momentos, niega la táctica tradicional de “golpear y huir”. Al considerar al ejército como el eje que articula la acción del Estado y favorece la reproducción social del poder de las élites en el conflicto social y político, apunta siempre a denunciar esa instrumentación.

²⁰ Un ejemplo: un elemento del repertorio de la guerrilla, el secuestro, tomó preeminencia con la solvencia económica de los narcotraficantes y su irrigación de la economía, a tal punto de desencadenar una reacción colectiva de éstos contra aquella con la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores).

²¹ Además de las fuentes primarias recogidas desde 1996, como fuentes de datos secundarios utilizamos el libro de Darío Villamizar (1995). También usamos el libro de entrevistas de Patricia Lara (1982).

En segundo lugar, el M19 al establecerse en lo urbano, enfrenta el reto de modificar la opinión pública. Sus acciones militares y políticas buscan con gran dinamismo su interlocución. En forma inmediata les construye una dimensión simbólica creadora de imágenes y representaciones, para legitimarlas y legitimar su perspectiva general. Si esas acciones pudieron darse como hechos aislados, el uso del rol de los *media* les da una repercusión nacional e internacional.

En tercer lugar, el M-19 altera las temporalidades de la acción. Le imprime un ritmo variable e intenso que no conocían las guerrillas en la periferia. De esa manera logra que el centro político no sea en general el principal codificador de la confrontación, quedando éste supeditado a la sorpresa y a la acción de los medios acumulados o conquistados por el M-19 como adversario. El M-19 llega por momentos a imponer sus condiciones, sin que esto quiera decir que la correlación de fuerzas esté de manera definitiva a su favor. Vale decir que, incluso en condiciones de debilidad, el M-19 buscó los perfiles de la acción que le permitieran llevar la iniciativa y dejar al descubierto, en términos políticos, a su adversario. En este sentido el M-19 modifica parcialmente el argumento de Ben-Rafael: “siendo los más poderosos, los gobernantes son quienes determinan el carácter del proceso de violencia y su desarrollo”. Para ello el M-19 invertía todos sus recursos sin importar su destino. Trataba de acumular otros, al producir nuevas condiciones en el escenario político y, luego, en el militar.

En cuarto lugar, el M-19 modifica los espacios de la acción armada, hizo de la ciudad y de sus sectores sociales instrumentos y referentes para su acción. No olvida el campo. En un principio las regiones cercanas a centros dinámicos y luego, para superar su debilidad y los golpes recibidos, resuelve concentrar su acción militar en zonas de colonización alejadas de los grandes centros urbanos, pero tratando por los *media* y otros medios de darle dimensión nacional.

En quinto lugar, el M-19 modifica los liderazgos tanto como las militancias, alejándose del sedentarismo y proponiendo una movilidad, una fluidez y una capacidad en varios escenarios de la acción. Básicamente se distancia de hecho de una tradición directa de la “violencia inicial de la guerrilla”, recogiendo un tejido social *sui generis* de miembros. Es un liderazgo y una militancia que se va capacitando para el tipo de acción que señalamos.

Ahora bien, si estas fueron las características políticas, su reconocimiento no pasa por evaluar el éxito o el fracaso de sus estrategias, ni depende del grado en que pudo darles una asociación exitosa. En general el M-19 nunca logró armonizarlas y lo caracterizó precisamente la disociación permanente entre sus políticas. Imposibilidad objetiva o mala gestión subjetiva de sus dirigentes es otro problema que no entrará en el orden de nuestra reflexión.

Si quisiéramos hacer una síntesis de la perspectiva política alcanzada por el M-19 con sus principales estrategias, la plantearíamos así: diferenciándose de la tradición de izquierda, armada y desarmada, que se había propuesto como noción de la política un proceso de revolución social complejo, el M-19 quiso a lo armado asociado con la política (que 'cada bala contenga más de política' decía Bateman en una de sus entrevistas), entendida esta última como una referencia

directa a la acción de oposición y conciliación con las instituciones, con los partidos y movimientos políticos, con los símbolos de una tradición de historia política. Así el M-19 asociaba su acción al juego de los pactos, las negociaciones sobre la forma de gobernar y sobre la participación de la oposición en la democracia. Desde ahí el M-19 buscó una legitimidad democrática de la guerra en el plano nacional e internacional; lo hizo al remitirse al fraude electoral a la Anapo y luego, desde finales de los años 70, cuando subrayaba las incapacidades del régimen político para modificarse y para aceptar alternativas diferentes a las tradiciones políticas.²²

En otras palabras, la actitud conspirativa del M-19 en sus inicios puso lo armado al servicio de la rebelión política y esa orientación se profundizó a comienzos de los años 80, cuando se tradujo en intercambios y negociaciones con las instituciones del Estado y de la política. Luego hacia 1985, con el progreso de cierto poder político y militar y bajo una difícil interacción con los actores institucionales cuando éstos ofrecían resistencia al proceso político con el M-19 su agitación política y conspirativa se puso al servicio de su propio desarrollo militar. La relación entre los dos términos se invirtió cambiando de dirección, lo político terminó al servicio del desarrollo militar en medio de grandes ambigüedades.

Conclusiones

La violencia de los años 50 reprodujo *una escisión* grande entre campo y ciudad, apartando al mundo rural de las posibilidades de una modernidad política, cultural y social, y permitiendo procesos de modernización autoritarios. Ubicada *la Violencia* en esa escisión proyectó formas de impotencia y laberintos sin salida de la resistencia política en Colombia. A pesar de las rupturas contenidas en las nuevas voluntades de la oposición radical de izquierda y en los contextos sociales de su definición, las guerrillas de los años 60 regresan subjetivamente a las lógicas culturales de esa *Violencia*, limitando los perfiles nuevos de una resistencia política hacia la instauración de una modernidad en el país. Las características señaladas en el M-19 tienen el significado de intensificar la ruptura con las lógicas de *la Violencia* y de colocar en un nuevo terreno la oposición radical en Colombia, el de la demanda de una democracia participativa moderna. Esta ubicación aminoraba los efectos regresivos de la reproducción de esa escisión histórica entre campo y ciudad, a pesar de que la misma intensificación de la violencia volviera a sumergir las relaciones sociales en el esquema político de la relación amigo-enemigo.

²² Encontramos una idea similar sobre el M-19 en el artículo de Salcedo (1989).

La confrontación realizada de los rasgos de los grupos armados y la crítica a las simplificaciones de enfoque de Pizarro demandan una alternativa de análisis. A pesar de toda una literatura sobre las guerrillas aún falta mucho en la interpretación sociológica, histórica y antropológica, cuando no en la perspectiva psicoanalítica. Se necesitan estudios en profundidad sobre perfiles del asentamiento social y de la inserción política de las guerrillas en un sector considerable de la población. Todavía está por investigarse con claridad el fondo social, cultural y subjetivo de ellas sobre lo cual son insuficientes las referencias a sus ideologías.

Bibliografía

- Arrubla, M. 1969. "Estudios sobre el subdesarrollo colombiano", *Centro de Estudios Colombianos*, Bogotá, editorial Oveja Negra, p.186.
- Alape, A. 1989. *Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, TIROFIJO*, Bogotá, Editorial Planeta, p. 399.
- Archila, M. 2003. *Idas y venidas, vueltas y revueltas, Protestas Sociales en Colombia, 1958-1990*, ICANH, Bogotá, CINEP, p. 508.
- Ben-Rafael, E. 1986. "Le conflit de guérilla", en *Sociologie du Travail*, N°4-86, pp. 426-441.
- Calvo, F. 1987. *Colombia: EP, Una Historia Armada*, Madrid, VOSA, p. 191.
- Castañeda, J. 1994. *La Utopía desarmada, intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*, Bogotá, TME editores, p. 579.
- Chazel, F. 1986. "Individualisme, Mobilisation et action collective", pp. 244-268, Birbaum, Pierre, y LECA, Jean (Sous la direction de) *Sur l'Individualisme*, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, p. 379.
- Correa, M. 1997. *Sueño Inconcluso, mi vivencia del ELN*, Bogotá, p. 231.
- Debray, R. 1968. *Revolución en la revolución Mi Defensa*, Cali, Editorial Pacífico, traducción del francés por Felipe Canal, p. 131.
- _____ 1975. *Las pruebas del fuego*, S. XXI, México, p. 339.
- Dobry, M. 1988. "Sociología de las crisis políticas", Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, Siglo XXI, p. 299, (en francés en 1986).
- Entrevistas*: Peregoyo, diciembre de 1996; Armel, septiembre de 1996; Rigo, septiembre del 2000; Ramón, diciembre del 2001; Jesús Aníbal Suárez, mayo del 2005; Raúl Alameda, mayo del 2005.
- González, J. 1992. *El estigma de las republicas independientes, 1955-1965*, Bogotá, Cinep, p. 195.
- Gros, C. 1991. *Colombia Indígena, Identidad cultural y cambio social*, Cerec, Bogotá, p. 335.
- Guevara, E. 1978. *La Guerra de Guerrillas*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
- Ferro, J. y Uribe, G. 2002. *El "Orden de la guerra, las FARC-EP: Entre la organización y la política"*, Centro Editorial Javeriano, Bogotá, CEJA, p. 207.
- Harnecker, M. 1988. *Unidad que Multiplica, Entrevista a dirigentes máximos de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional*, Quito, Quimera ediciones, p. 209.
- Lara, P. 1982. *Siembra Vientos y recogerás tempestades*, Bogotá, Editorial Planeta, p. 326.

- Medina, C. 1994. *ELN, Una historia contada a dos voces*, Bogotá, Rodríguez Quito Editores, p. 266.
- _____. 2001. *ELN, una historia de los orígenes*, Bogotá, Rodríguez Quito Editores, p. 413.
- Palacios, M. 1995. *Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994*, Bogotá, Norma.
- _____. 1999. “La solución política al conflicto armado, 1982-1997”, Camacho, A., y Leal, F., 1999, *Armar la paz es desarmar la guerra*, Bogotá, IEPRI, Fescol, Cerec, pp. 345-401.
- Pécaut, D. 1986. “Guérillas et violence: le cas de la Colombie”, *Sociologie du Travail*, 4-86, pp. 484-586.
- _____. 1987. “Acerca de la Violencia de los años Cincuenta”, pp. 29-44, y “Reflexiones sobre el nacimiento de las guerrillas en Colombia”, pp. 45-75, Pécaut, D., 2003, *Violencia y Política en Colombia, Elementos de Reflexión*, Universidad del Valle, Medellín, Hombre Nuevo, p. 161.
- _____. 1997. “Presente pasado y futuro de la violencia”, pp. 89-156, Pécaut, D., 2001, *Guerra contra la sociedad*, Bogotá, Espasa Hoy, p. 308.
- Peñaranda, R. 1992. “Los orígenes del Movimiento armado Quintín Lame”, pp. 405-418, Guerrero, A. 1992, *Cultura Política, Movimientos Sociales y Violencia en la historia de Colombia*, VIII Congreso Nacional de Historia de Colombia, UIS, Bucaramanga.
- _____. 1999. “De rebeldes a ciudadanos: El caso del Movimiento armado Quintín Lame”, pp. 75-131, Peñaranda, R., y Guerrero, J., 1999, *De las armas a la Política*, Bogotá, TM Editores, IEPRI (UN), p. 333.
- Pizarro, E. 1990. “La insurgencia armada: raíces y perspectivas”, pp. 411-443, Leal, F. y, Zamosc, L., *Al filo del caos, Crisis política en la Colombia de los años 80*, UN IEPRI, Bogotá, TM Editores, p. 515.
- _____. 1991a. *Las FARC, de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, 1949-1966*, Bogotá, TM Editores, IEPRI, p. 245.
- _____. 1991b. “Elementos para una sociología de la guerrilla colombiana”, *Análisis Político*, Bogotá, enero a abril, p. 7-22.
- _____. 1996. *Insurgencia sin revolución, la guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*, (UN), Bogotá, TM Editores, p. 267.
- Ramírez, W. 1990. “La guerrilla rural en Colombia: ¿Una vía hacia la colonización armada?”, Ramírez, W., 1990, *Estado, violencia y Democracia, Ensayos*, Bogotá, IEPRI y T.M.E., pp.68-71.
- Salcedo, H. 1989. “Los acuerdos del Tolima: Una paz de baja intensidad”, *Opción* N°8, Bogotá.
- Sánchez, G. 1998. “Intelectuales... poder... y cultura nacional”, varios autores, 2003, *Los intelectuales y la política*, Bogotá, IEPRI y FICA, p. 255.
- Sancho, R. 2003. “Guerrilla y terrorismo en Colombia y España, ELN y ETA”, *Colección He Doc.*, Bucaramanga.
- Tilly, C. 1978. *From Mobilization to Revolution*, Reading, Mass., Addison-Wesley.
- Vargas, A. 1992. *Magdalena Medio Santandereano, Colonización y Conflicto Armado*, Bogotá, Cinep, p. 359.
- Villamizar, D. 1995. *Aquel 19 será*, Bogotá, Planeta, p. 615.
- _____. 2002. *Jaime Bateman, biografía de un revolucionario*, Bogotá, Planeta, p. 442.

- Villarraga, A. y Plazas, N. 1994. *Para Reconstruir los sueños (una historia del EPL)*, Colcultura, Bogotá, Progresar, p. 491.
- Waldmann, P. 1986. “La violencia política en América Latina”, varios autores, 1986, *Procesos de reconciliación en América Latina*, Bogotá, Instituto de Estudios Liberales.
- Wickham-Crowley, T. 1992. *Guerrillas & revolution in Latin America, a comparative study of insurgents and regimes since 1956*, New Jersey, Princeton University Press, Princeton, p. 424.
- _____ 2001. “Ganadores, Perdedores y Fracados: Hacia una sociología comparativa de los movimientos guerrilleros latinoamericanos”, pp. 144-192, Eckstein, S., 1989, *poder y protesta popular; Movimientos sociales latinoamericanos*, México, Siglo XXI editores.
- Wieviorka, M. 1988 *Sociétés et terrorisme*, Paris, Editorial Fayard, p. 543.
- Sociedad y Conflicto*. 1992-1998. colección orientada por el Cinep, con patrocinio del Comité Católico Contra el Hambre, CCFD, y la Fundación por el Progreso del Hombre, FPH.